

El PP impone su mayoría en el Taibilla e impide aprobar la subida del agua

Los municipios populares comprometen el futuro de la Mancomunidad al negarse a asumir el coste de las desaladoras



F. J. BENITO El Partido Popular impuso ayer su mayoría en el consejo de administración de la Mancomunidad de Canales del Taibilla para tumbar, por primera vez en la historia, la subida de la tarifa de agua propuesta por el equipo gestor, incremento necesario para afrontar el pago de las inversiones realizadas (desaladoras) y que han conseguido que el Taibilla garantice el abastecimiento de los 79 municipios de Alicante, Murcia y Albacete -2,5 millones de personas- que reciben los caudales de la Mancomunidad. El delegado del Gobierno en el Taibilla, Isidoro Carillo, propuso un incremento lineal del 26%, pasando la tarifa de los 0,432 euros/m³ de 2007 a 0,544 euros/m³ para este año. En concreto, un aumento de once céntimos de euro por cada mil litros de agua servidos a los ayuntamientos, que aplican después el resto de tarifas en el recibo que llega al usuario.

El informe justificando la subida, que no es vinculante, se trasladó ayer al Ministerio de Medio Ambiente y hoy será el Consejo de Ministros el que decida si aprueba la nueva tarifa que, de no incrementarse, pondrá en serio riesgo de quiebra a la propia Mancomunidad de Canales del Taibilla, ya que cuenta con ese dinero para afrontar el pago de los 400 millones de euros -65% subvencionados por la UE- que ha invertido en la construcción de la desaladoras Alicante II, San Pedro del Pinatar y Valdelentisco, así como en potabilizadoras y conexiones con los municipios. La reunión del consejo de administración del Taibilla transcurrió en medio de una gran tensión y continuas descalificaciones entre los alcaldes. Al final el PP impuso su mayoría y frustró con 47 votos la aprobación del informe, que fue apoyado por 10 votos -consejeros de la Administración central y los ayuntamientos socialistas de Elche, Guardamar, San Isidro y Montesinos- y tuvo diez abstenciones -municipios socialistas murcianos-. Entre los consistorios que encabezaron la "revuelta" popular, Alicante y Murcia.

El consejo de administración de la Mancomunidad de Canales del Taibilla celebrado en Cartagena se convirtió en un ring improvisado en el que el PP trató de imponer sus tesis a favor de los trasvases como única solución a los problemas de abastecimiento rechazando la alternativa de la desalación, complemento por el que ha optado el Ministerio de Medio Ambiente para completar los caudales del Tajo-Segura, bajo mínimos por la sequía. El guión estaba escrito con anterioridad como lo demuestra que prácticamente al mismo tiempo que se celebraba la reunión, la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, convocaba en San Miguel de Salinas a la Plataforma de Alcaldes del PP que reclama el trasvase del Ebro, para anunciar que se opondrán a la subida del agua, retando incluso a la Mancomunidad a que la corte. Isidoro Carrillo, delegado del Gobierno en el Taibilla, intentó justificar el por qué del incremento, detallando las inversiones que se habían realizado y recordando que todas habían tenido el visto bueno de los ayuntamientos que ahora se niegan a aprobar una tarifa necesaria para pagar lo aprobado en su día. No sirvió de nada, los populares llevaban la lección perfectamente aprendida y hubo incluso algunos ayuntamientos del PSOE -Bigastro, Pilar de la Horadada o Redován, entre otros- que ni asistieron al consejo. Las desaladoras -todas en marcha- garantizan el abastecimiento urbano pero su coste debe ser asumido por los usuarios, según exige la directiva marco del Agua. Los ayuntamientos no aceptan la solución y exigen que el agua continúe llegando del Tajo y se complete con la construcción del trasvase del Ebro, alternativa de la que no quiere saber nada Medio Ambiente.

En este sentido y sobre la repercusión de la subida que, si no hay marcha atrás, aprobará hoy el Gobierno, el diputado socialista Juan Manuel Padilla, edil en Aspe, reveló que "al final la tarifa que fija el Taibilla es la que menos repercute en el recibo del ciudadano ya que son los ayuntamientos los que fijan la cuantía". Padilla puso como ejemplo el caso de "el ayuntamiento de Crevillent que en 2007 pagaba por el agua al Taibilla 0,4 euros el metro cúbico después la cobraba a sus vecinos por 0,8 euros".

Por su parte, la vicesecretaria provincial del PP y diputada en las Cortes Generales, Macarena Montesinos, anunció ayer que exigirá al Gobierno que explique los motivos por los que "quiere subir el agua a 34 municipios alicantinos" y le exigió que asuma los costes de la desalación. Montesinos denunció "el engaño

constante de Zapatero presentando la desalación como una solución puntual cuando es una sustitución progresiva de las aportaciones del Tajo-Segura y afectará a la provincia de Alicante en 2009 cuando el agua desalada superará por primera vez a la del trasvase".